

Imprimir

Aumentar la posesión de armas en respuesta a la terrible violencia del ICE no es un camino hacia la seguridad ni la liberación, argumenta la epidemióloga Rachel Hoopsick. Es un camino hacia más muertes, mayor debilidad política y un afianzamiento más profundo de las mismas fuerzas a las que se opone la izquierda.

La resistencia más eficaz a la represión no ha provenido de civiles armados que se enfrentan directamente al Estado, sino de la disrupción coordinada de los sistemas económicos y políticos. (Bryan Dozier / Agencia Anadolu vía Getty Images)

La creciente violencia política en este país —incluidos los recientes asesinatos de Alex Pretti , Renee Good y Keith Porter a manos de agentes federales de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos— ha planteado la pregunta: frente a un Estado cada vez más autoritario, ¿debería la gente de izquierda armarse?

Aunque los republicanos registrados tienen más del doble de probabilidades de poseer al menos un arma en comparación con los demócratas registrados (45 % frente al 18 %, respectivamente), la posesión de armas entre la izquierda está en aumento. Para muchos, ante tal violencia estatal, las armas pueden ofrecer una última línea de defensa contra la violencia gubernamental.

Este argumento no es nuevo ni frívolo. Se basa en un miedo, un dolor y una ira reales contra un Estado que ha demostrado repetidamente su disposición a usar la violencia contra cualquiera que se interponga en su camino. Pero también es profundamente erróneo.

Desde una perspectiva de salud pública y desde la perspectiva de cómo opera realmente el poder en las sociedades capitalistas, expandir la posesión de armas por parte de civiles no es un camino hacia la seguridad ni la liberación. Es un camino hacia más muertes, mayor debilidad política y un afianzamiento más profundo de las mismas fuerzas a las que se opone la izquierda.

Como investigadora de salud pública, abordo este debate desde la perspectiva de los resultados. Qué sucede cuando proliferan las armas, quiénes se ven perjudicados y quiénes se benefician, y qué estrategias han limitado el poder autoritario en el pasado, son preguntas con respuesta empírica.

Las respuestas se alejan de las armas de fuego y apuntan hacia la acción colectiva como el único contrapeso creíble al creciente autoritarismo.

Estados Unidos ya está sobrearmado

Cualquier debate serio sobre el armamento a civiles debe partir de una realidad empírica básica: Estados Unidos ya tiene más armas que habitantes. Según estimaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, es probable que haya entre 400 y 500 millones de armas de fuego en posesión de civiles, un nivel de saturación sin igual en ningún otro país del mundo. Este no es un punto de partida para añadir más armas sin consecuencias.

Aumentar la propiedad de armas por parte de los civiles no es un camino hacia la seguridad ni la liberación: es un camino hacia más muertes, más debilidad política y un afianzamiento más profundo de las mismas fuerzas a las que se opone la izquierda.

En 2023, casi 47,000 personas murieron en Estados Unidos por heridas de arma de fuego, lo que representa un promedio de más de cinco muertes por hora, cada hora, cada día. Pero lo que a menudo se omite en los titulares —y en la percepción pública— es el hecho de que casi seis de cada diez muertes por arma de fuego son suicidios.

Un estudio publicado en 2022 por investigadores del Centro para la Prevención de Lesiones por Armas de Fuego de la Universidad de Washington descubrió que los adultos en hogares con armas de fuego creían que los disparos accidentales eran más probables que el suicidio o la agresión con armas de fuego, a pesar de la creciente evidencia de lo contrario.

La relación entre el acceso a armas de fuego y el suicidio está particularmente bien

establecida. Las armas de fuego no aumentan la ideación suicida, pero sí incrementan drásticamente la probabilidad de que un intento de suicidio resulte en muerte.

A diferencia de otras causas de muerte, los intentos de suicidio con arma de fuego rara vez permiten sobrevivir. Las investigaciones demuestran que más del 90 % de los intentos de suicidio con arma de fuego resultan en muerte. En momentos de angustia psicológica aguda, que suelen ser breves y transitorios, el fácil acceso a un arma de fuego convierte la crisis en fatalidad.

Por eso, la posesión de armas se asocia sistemáticamente con un mayor riesgo de suicidio , incluso después de considerar otros factores. Por eso, los Estados con mayores tasas de posesión de armas tienen mayores tasas de suicidio con armas de fuego . Y también por eso, las afirmaciones de que las armas proporcionan “seguridad” se desmoronan al analizarlas desde una perspectiva poblacional.

Las armas de fuego han sido la principal causa de muerte entre niños y adolescentes estadounidenses desde 2020, cuando superaron a todas las demás causas de muerte. En un estudio sobre muertes violentas en veintinueve países de altos ingresos, más del 98 % de todos los niños muertos por armas de fuego (homicidio, suicidio y accidente) ocurrieron en Estados Unidos. Estos no son efectos marginales. Son características centrales de una sociedad sobrearmada.

Desde una perspectiva de salud pública, las armas de fuego funcionan como cualquier otro producto de consumo altamente letal: su creciente disponibilidad incrementa las lesiones y las muertes. Esto no implica una declaración sobre la intención o la moralidad individual. Se trata de exposición y riesgo.

El argumento de la Segunda Enmienda

Sin duda, muchos sostienen que este es precisamente el tipo de momento para el que se redactó la Segunda Enmienda. Cuando el estado se vuelve irresponsable y las fuerzas del orden y las agencias federales actúan con impunidad, la resistencia armada se presenta

como una salvaguardia constitucional y una necesidad moral.

Es importante reconocer este argumento con honestidad en lugar de descartarlo por reflejo. La preocupación que refleja —que no se puede confiar en que el Estado proteja a sus comunidades vulnerables— está justificada. Pero reconocer esa lógica histórica no resuelve la cuestión en cuestión. La cuestión relevante no es lo que la Segunda Enmienda imaginó en abstracto, sino lo que realmente sucede en una sociedad ya inundada de armas de fuego.

Cuando los civiles están armados, el Estado no se retira; responde con armamento más pesado, una vigilancia más amplia y tácticas más agresivas.

En la América contemporánea, la expansión de la posesión de armas por parte de civiles no ha frenado significativamente la violencia estatal. En la práctica, no ha disuadido a la policía militarizada ni a la aplicación de la ley federal. Al contrario, tiene el potencial de intensificar los enfrentamientos, aumentar la percepción de amenaza y justificar una mayor militarización. Cuando los civiles están armados, el Estado no se repliega; responde con armamento más pesado, una vigilancia más amplia y tácticas más agresivas.

Al mismo tiempo, los daños del aumento de la prevalencia de armas de fuego recaen abrumadoramente sobre la población civil, en particular sobre la clase trabajadora, quienes experimentan crisis de salud mental y las comunidades racializadas que ya sufren un exceso de vigilancia policial. En la práctica, armar a la población civil no desvía el poder del Estado ni del capital. Transfiere el riesgo a las personas —a sus hogares, momentos de crisis e interacciones cotidianas—, donde previsiblemente produce lesiones y muertes sin alterar las estructuras que generan la represión en primer lugar.

Las armas privatizan el riesgo, no generan poder

Una de las principales fallas del argumento de “armar a la izquierda” es que confunde la capacidad individual con el poder colectivo. Un arma de fuego es un bien privado. Sus riesgos y consecuencias son individualizados, incluso cuando su simbolismo es colectivo. Vive en hogares, autos y bolsillos, no en instituciones capaces de enfrentarse a la autoridad estatal.

Cuando las armas entran en las comunidades, no se limitan a momentos de confrontación política. Están presentes en discusiones, episodios depresivos, conflictos domésticos y accidentes. Los datos de salud pública muestran que estos contextos cotidianos, y no la resistencia organizada, son responsables de la gran mayoría de las muertes por armas de fuego. De esta manera, armar a civiles convierte la violencia estructural en una tragedia individualizada. Sustituye la solidaridad por la exposición y la protección colectiva por el peligro privado.

Precisamente por eso, los movimientos de masas que han logrado contener el poder autoritario se han basado en herramientas diferentes. Históricamente, la resistencia más eficaz a la represión no ha provenido de civiles armados que se enfrentan directamente al Estado, sino de la disrupción coordinada de los sistemas económicos y políticos: huelgas, boicots, incumplimiento masivo y retirada colectiva de los trabajadores.

Desde los levantamientos obreros estadounidenses de la década de 1930 hasta el uso del boicot y el rechazo masivo por parte del movimiento por los derechos civiles a mediados del siglo XX, las campañas de huelga de Solidaridad en Polonia en 1980 y los trastornos económicos del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica desde la década de 1950 hasta la de 1990, el poder se ganó haciendo que la represión fuera económica y políticamente insostenible en lugar de intentar igualar directamente la fuerza coercitiva del Estado.

Lo que Engels entendió bien y por qué sigue siendo importante

Friedrich Engels comprendió claramente esta distinción. Al escribir sobre la Inglaterra del siglo XIX, describió la lucha de clases como una forma de « guerra social », pero fue explícito sobre dónde se forjaba realmente el poder de la clase trabajadora.

Ese poder de la clase trabajadora no podía surgir mediante un lenguaje militante o actos aislados, sino que debía construirse mediante una acción colectiva arraigada en las condiciones materiales.

Las huelgas, argumentaba Engels, funcionaban como una escuela de guerra no porque

fueran actos simbólicos de desafío, sino porque obligaban a los trabajadores a actuar colectivamente ante la privación real. Al soportar juntos el hambre, las represalias y la incertidumbre, los trabajadores desarrollaron la disciplina, la coordinación y la solidaridad necesarias para una lucha sostenida. Eran intervenciones materiales que imponían costos reales al capital.

Igualmente importante, Engels se mostró escéptico ante las posturas radicales que eludían este proceso. Enfatizó constantemente que el poder de la clase trabajadora no podía surgir mediante un lenguaje militante o actos aislados, sino que debía construirse mediante la acción colectiva arraigada en las condiciones materiales. Argumentaba que la lucha divorciada de la participación de las masas estaba políticamente vacía, incapaz de alterar el equilibrio de poder entre el trabajo y el capital.

La relevancia de esta idea hoy debería ser obvia. Las armas de fuego pueden parecer instrumentos de resistencia, pero no crean la capacidad colectiva necesaria para enfrentarse al poder estatal o corporativo. Concentran la fuerza a nivel individual, mientras que las estructuras que organizan la represión permanecen fundamentalmente inalteradas. El trabajo organizado, en cambio, opera en el nivel que Engels identificó como decisivo.

Las huelgas generales, los paros masivos y las acciones sindicales coordinadas atacan los cimientos del propio gobierno autoritario: la productividad económica, la legitimidad política y la capacidad administrativa. Hacen que la represión sea costosa en lugar de catártica. Y exponen la dependencia del Estado de las mismas personas a las que pretende disciplinar y controlar.

La economía política de las armas

Hay otra dimensión de este debate que a menudo se ignora: las armas no son solo herramientas. Son mercancías integradas en una poderosa economía política.

Los datos de las asociaciones comerciales de la industria estiman que la industria de armas de fuego y municiones fue responsable de más de 91 mil millones de dólares en actividad

económica solo en 2025. Cada arma de fuego comprada contribuye a una industria y un aparato de lobby que ha gastado enormes sumas para moldear la política estadounidense a través de elecciones, nombramientos judiciales y batallas legislativas.

En las últimas dos décadas, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha invertido más de 58 millones de dólares solo en cabildeo federal. La organización ha bloqueado con éxito incluso medidas modestas de seguridad para las armas, a pesar del abrumador apoyo público. Según datos del Pew Research Center, la mayoría de los estadounidenses considera demasiado fácil obtener un arma legalmente (61%) y está a favor de leyes de armas más estrictas (58%).

Esta historia importa. La compra de armas no existe fuera de la política. Fortalece materialmente a las fuerzas que han normalizado la violencia armada masiva, obstaculizado la rendición de cuentas y socavado la gobernanza democrática. Cuando la izquierda fomenta la posesión de armas, incluso por razones aparentemente opositoras, canaliza dinero, legitimidad y poder cultural hacia la misma maquinaria.

Las armas de fuego pueden parecer instrumentos de resistencia, pero no crean la capacidad colectiva necesaria para enfrentar el poder estatal o corporativo.

Esta no es una preocupación abstracta. Es medible. La influencia del lobby de las armas ha moldeado los resultados de las políticas durante décadas, a menudo en oposición directa a la evidencia de salud pública y la voluntad popular. La influencia del lobby de las armas incluso ha moldeado lo que sabemos *sobre* la violencia armada. La financiación federal para la investigación de lesiones por armas de fuego se redujo de hecho durante décadas después de la Enmienda Dickey de 1990, que prohibió a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades utilizar fondos “para defender o promover el control de armas”. Este clima de restricción política ha dejado a los investigadores de salud pública con datos limitados y ha retrasado la investigación crítica sobre los patrones, las causas y la prevención de las muertes por armas de fuego. Cualquier estrategia que refuerce esta estructura de poder debe verse con profundo escepticismo.

Un marco de salud pública para el antifascismo

Desde una perspectiva de salud pública, la pregunta no es si la violencia existe —existe absolutamente—, sino cómo se distribuye y mitiga el daño. Las estrategias que aumentan la exposición a medios letales aumentan considerablemente la mortalidad. Las estrategias que fomentan la capacidad colectiva, la cohesión social y la seguridad económica la reducen considerablemente.

Por eso la acción laboral es importante no solo políticamente, sino también epidemiológicamente. La inseguridad económica y el desempleo se asocian con peores resultados en salud mental y un mayor riesgo de suicidio, mientras que las investigaciones demuestran que la explotación económica en sí misma está vinculada a un mayor malestar psicológico. El empleo estable, la negociación colectiva y la protección de los trabajadores no solo son fuentes de poder político, sino que también protegen la salud. La solidaridad protege. La precariedad es mortal.

Aunque algunos académicos e historiadores evitan equiparar los acontecimientos actuales en Estados Unidos con regímenes históricamente fascistas, muchos ven riesgos significativos y paralelismos preocupantes. El fascismo estadounidense contemporáneo avanza, y no se detendrá convirtiendo hogares en arsenales. Se detendrá mediante la negativa organizada y colectiva a cooperar con sistemas autoritarios. Esa negativa requiere una valentía diferente: la valentía de arriesgar los ingresos, la estabilidad y la comodidad en pos de la supervivencia colectiva.

La izquierda se enfrenta a una verdadera disyuntiva. Puede adoptar una política de miedo, una defensa privatizada y un riesgo creciente, un camino que, tanto la historia como la salud pública, sugiere que conducirá a más muertes y menos poder. O puede invertir en la lenta y difícil labor de construir instituciones colectivas capaces de confrontar el autoritarismo desde sus raíces.

Más armas no salvarán a este país. Solo agravarán la crisis, llenando los bolsillos de

fabricantes de armas y cabilderos con más riqueza e influencia política, mientras que nuestras calles, hogares y comunidades se llenarán de más gente de clase trabajadora.

La acción colectiva —huelgas, boicots, incumplimiento masivo, retirada de trabajadores— es la única fuerza que históricamente ha limitado el poder autoritario. El fascismo no se detendrá ante el mostrador de armas.

Rachel Hoopsick, profesora adjunta de epidemiología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y becaria de Public Voices del OpEd Project.

Fuente: Revista Jacobin

Foto tomada de: Revista Jacobin